



- **Índice de Paz México 2024:**  
*identificación y medición de los factores que impulsan la paz*  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA  
Y LA PAZ, 2024  
Instituto para la Economía y la Paz,  
Sídney

## ¿Avanza la paz en México?

ELENA AZAOLA

**E**n mayo de 2024 se publicó la décima primera edición del Índice de Paz México.<sup>1</sup> Se trata de un texto de la mayor importancia, por varias razones. En primer lugar, por ser parte del Índice de Paz Global,<sup>2</sup> la más importante medición de paz del ámbito mundial, que cada año da a conocer el Institute for Economics and Peace, en el que clasifica a 163 Estados y territorios independientes según sus niveles de paz. En segundo lugar, porque la ventaja de contar con un índice de esta naturaleza en México consiste en que, gracias a este esfuerzo sistemático y cuidadoso de medición año con año, disponemos de información precisa sobre los mismos indicadores durante un periodo prolongado, lo que nos da una perspectiva, no sólo de dónde estamos, sino de cuáles son las tendencias que observamos durante los últimos años. En tercero y último lugar, porque el Índice de Paz se construye a partir del análisis de casi 25 000 indicadores de progreso

***Are We Getting More Peaceful in Mexico?***

ELENA AZAOLA

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Ciudad de México, Ciudad de México, México

✉ eazaola@ciesas.edu.mx

- 1 Para el texto completo del Índice de Paz México 2024, véase <<https://www.indicedepazmexico.org/>>.
- 2 Para Índice de Paz Global, véase <<https://www.visionofhumanity.org/wpcontent/uploads/2023/06/GPI-2023-Web.pdf>>.

económico y social para ver cuáles de ellos tienen relaciones estadísticamente significativas con la paz.

En este texto me propongo reseñar, por un lado, algunos de los principales hallazgos que contiene el Índice de Paz México 2024, pero también me he dado a la tarea de plantear varias preguntas y formular algunas recomendaciones, que ojalá las posteriores ediciones puedan recoger, ya que he tenido el privilegio de estar en contacto con Carlos Juárez, quien preside la oficina que elabora este índice en México.

Destacaré primero algunos de los hallazgos más significativos que contiene la edición que comentamos. El índice señala que el panorama de la delincuencia organizada en México continúa modificándose, con un incremento notorio de la extorsión y de los puntos de venta de drogas al menudeo. La rivalidad entre los dos cárteles principales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, ha dejado un saldo de 19 000 muertos entre 2017 y 2023. También importa señalar que la tasa nacional de delincuencia organizada se ha incrementado en 62% desde 2015 hasta 2023.

En 2023, la paz en México mejoró 1.4%, de acuerdo con el índice, y si bien 15 estados mostraron mejoras en la paz, 17 mostraron un deterioro. El índice hace notar que, por cuarto año consecutivo, disminuyó la tasa de homicidios y de otros delitos. De hecho, la tasa de homicidios cayó a 23.3 muertes por cada 100 000 habitantes, caída que posiblemente se explica, al menos en parte, por la disminución de actividades que tuvo lugar en 2020 y 2021 a causa de la pandemia por covid 19.

El índice destaca que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser político, dado que la violencia política ha aumentado sustancialmente durante los últimos tres años, al pasar de 51 asesinatos de figuras políticas y funcionarios gubernamentales en 2020 a 171 en 2023. Sin embargo, como lo muestra el propio índice, también es un país peligroso para ser periodista, niño, joven,

mujer, policía, etc. Es decir, por mi parte, agregaría que es uno de los países más peligrosos a secas.

Entre los estados, Colima se ubicó como el menos pacífico del país el año pasado, seguido por Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas. En contraste, Yucatán, como ha sucedido desde hace varios años, se ubica como el estado más pacífico, seguido por Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila. Vale la pena destacar que el índice contiene mediciones muy precisas para cada entidad y toma en cuenta un conjunto de indicadores —tasa de homicidios, delitos con violencia, crímenes de delincuencia organizada, percepción de miedo social, costos de protección, gasto en fuerzas armadas, gasto en seguridad pública y gastos en sistema judicial y encarcelamiento— que incluso permiten medir el costo económico de la violencia por cada entidad.

Si bien la tasa de homicidios cayó, la violencia familiar y la violencia sexual cuentan con tasas que se han más que duplicado desde 2015. De hecho, la tasa de delitos violentos aumentó 18% entre 2015 y 2023, por lo que el índice destaca que el país es sustancialmente menos pacífico ahora que hace ocho años. Durante este periodo, la tasa de homicidios se incrementó en 54% y la de delitos cometidos con armas de fuego en 64%. Asimismo, la proporción de homicidios asociados al crimen organizado se incrementó en 145%. En síntesis, la tasa de homicidios en México, importa destacarlo, ocupa el lugar número 14 entre las peores del mundo.

También importa destacar, como lo hace el índice, que tenemos un país con 120 000 personas reportadas como desaparecidas, de las que casi 50 000 han desaparecido durante los últimos cinco años.

El gasto de la seguridad pública y la justicia en México es menos de la mitad del promedio de Latinoamérica, y en 2023 fue menor a lo que se gastó en 2008. Esto nos permite señalar que es urgente invertir más recursos para poder incrementar la capacidad de las instituciones de justicia, que no

se dan abasto con el número de casos que tienen para investigar. Sabemos, por otras fuentes, que hay ministerios públicos en el país que tienen a su cargo la responsabilidad de 2 000 carpetas de investigación, lo que es imposible que cualquiera pueda gestionar. También sabemos, por el índice, que el país tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 000 habitantes, lo que representa una cuarta parte del promedio mundial y explica los altos niveles de impunidad que tenemos en México.

La Paz Positiva en México, que se mide por cuatro indicadores —buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción, altos niveles de capital humano y entorno empresarial sólido—, se ha deteriorado en 3.7% durante la última década. Por ello, el índice señala que combatir únicamente los factores que impulsan la violencia no es suficiente para mantener la paz. Mejorar los niveles de paz en México requiere estrategias más amplias, que incluyan abordar la corrupción y crear instituciones eficaces en las que la población pueda confiar.

Otro dato que resulta preocupante es que, a pesar de que contamos con numerosos indicios de que los grupos del crimen organizado han escalado la violencia y han avanzado en el control de cada vez más territorios, el gasto en seguridad disminuyó en 42% y el de justicia en 9% entre 2015 y 2023.

El índice estima que en 2023 el impacto económico de la violencia fue de 37 430 pesos por persona, lo que representa más del doble del salario mensual promedio en México, mientras que en cuatro estados —Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas— el costo de la violencia representó aproximadamente la mitad del producto interno bruto de la entidad.

Llegados a este punto, me gustaría plantear algunas preguntas. Por ejemplo, me pregunto si sería factible incorporar al índice algunos análisis de tipo cualitativo, para entender asuntos como los siguientes: ¿qué significa para las personas que viven en una

cierta localidad una mejoría o un empeoramiento en los índices de paz?, ¿cómo se modifican sus vidas en un caso y en el otro? También me pregunto si sería factible tratar de comprender qué hay detrás de los indicadores que mejoran o que empeoran, o qué es lo que impulsa las mejoras y qué es lo que propicia las caídas. Quizá, a partir de ahí, incluso podrían proponerse sugerencias a los ciudadanos y ciudadanas, acerca de qué pueden hacer para participar en la construcción de paz en sus localidades. También se podrían incorporar análisis de mejora o deterioro de las condiciones de vida en las prisiones y de cómo impacta esto en las comunidades. Asimismo, se podrían responder otras preguntas, como ¿qué significa para las personas vivir en un clima de creciente polarización?, ¿cómo afecta sus relaciones en la familia, el trabajo y la comunidad?, o bien ¿cómo vamos a reparar los graves daños que ha sufrido la infancia de nuestro país con un número acumulado de más de 500 000 víctimas de homicidio y más de 120 000 desaparecidos?, ¿qué impacto tienen estos daños y cómo afectan el potencial de desarrollo del país?, ¿qué significa construir la paz sobre un porcentaje significativo de población que ha sufrido lesiones, pérdidas o daños de distinto tipo, los cuales muchas veces la han obligado a abandonar sus hogares?, ¿qué efecto tiene el desplazamiento forzado y cómo se miden los daños que provoca? Si no tomamos en cuenta estas preguntas, ¿de qué nos sirve saber que la paz mejoró en un determinado porcentaje durante un cierto periodo?

También quisiera hacer notar que, en ocasiones, la conclusión que puede extraerse a partir de la medición de algunos indicadores contrasta con los datos de otras fuentes que el propio índice cita, lo que puede generar confusiones. Hay casos, como los de Zacatecas, Michoacán o Tabasco, en los que, a partir de ciertos indicadores, parecería haber una cierta mejora en la paz, aunque uno fácilmente podría encontrar evidencias para sostener lo contrario. Se entiende que los datos que utiliza el índice

proviene de fuentes oficiales, pero no podemos ignorar que estos registros no son tan precisos como quisiéramos y muchas veces han sido objeto de manipulación, como sabemos. Ello no implica dejar de reconocer la importancia que tiene dar seguimiento puntual y trazar la evolución de indicadores importantes, como los de homicidio, delitos con violencia, delitos con arma de fuego, miedo a la violencia y crímenes de delincuencia organizada.

En el caso de los homicidios, se analiza el comportamiento por sexo y se destaca que 89 de cada 100 homicidios se cometen contra hombres y 11 contra mujeres. Sin embargo, me parece que el caso de los feminicidios tendría que dar lugar a un análisis más detenido, ya que sabemos que los criterios para clasificarlos de esta manera y su aplicación varían de una entidad a otra, y algunos estudios han señalado que en realidad un mayor número de homicidios contra mujeres tendría que haber sido clasificado como feminicidio, pero no fue así. De cualquier forma, me parecería muy importante que el índice considerara que la violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera notoria, sobre todo si se suman los casos de homicidio a los de lesiones, violencia familiar y violencia sexual. Éste es un fenómeno que muestra un importante deterioro del tejido social, para el cual los especialistas no hemos sido capaces de ofrecer explicaciones suficientes, sin las cuales se hace más difícil enfrentar con éxito este fenómeno.

Sería deseable también incorporar el análisis por grupos de edad para poder apreciar la afectación especial de los jóvenes y los niños en los delitos violentos, así como el mayor riesgo de reclutamiento por parte de los grupos de la delincuencia organizada al que se hallan expuestos especialmente las y los adolescentes.

Otro gran acierto es que se hace un análisis muy detallado de los principales grupos de delincuencia organizada, de los delitos que cometen y de la expansión de sus actividades en el territorio

nacional; también de la diversificación de sus actividades y de los cambios en el tipo de narcóticos con los que trafican.

Del mismo modo, se hace referencia a los riesgos ambientales y a la problemática que enfrentan los migrantes en Chiapas, ya que son vulnerables a diversos delitos que pocas veces denuncian. Estos análisis que contiene el índice se hallan muy bien informados y ofrecen un panorama más completo y complejo del que los indicadores numéricos pueden dar cuenta. Asimismo, constituyen una aportación muy valiosa para entender las problemáticas diversas que se viven en las distintas regiones del país.

El análisis que se hace de los delitos violentos es también relevante. La conclusión principal es que mientras el robo y el asalto se han mantenido relativamente estables, la violencia familiar y la violencia sexual se han más que duplicado. Una vez más, necesitamos encontrar explicaciones para estos fenómenos si es que queremos que disminuyan. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si el hecho de que Colima tenga la peor tasa de violencia familiar se encuentra relacionado con que también cuenta con la tasa más elevada de homicidios. Despejar esta clase de preguntas nos podría ayudar a proponer políticas específicas para la atención de estos fenómenos.

En lo que se refiere a la violencia sexual, me parece interesante que el índice destaque que las niñas de entre cinco y nueve años tienen tres veces más probabilidades de sufrir esta clase de abusos en comparación con los niños, y que las adolescentes de 15 a 17 años tienen ocho veces más posibilidades de sufrirlos que los hombres de la misma edad.

Otro gran acierto es el análisis minucioso del impacto económico que tiene la violencia en las distintas entidades en comparación con los recursos que cada una invierte en seguridad y justicia, lo que permite observar que los muy bajos niveles de gasto no se corresponden con los muy altos niveles de violencia que enfrenta nuestro país.

Uno de los datos que aporta el índice es que por cada peso ahorrado en la contención de la violencia habrá un peso adicional en la actividad económica, y que los beneficios económicos, que pueden arrojar una mayor paz, podrían ser significativos.

De los pilares de Paz Positiva sólo dos han mejorado desde 2016: la distribución equitativa de recursos y el libre flujo de información. Sin embargo, los otros cinco pilares de la Paz Positiva se han deteriorado, a saber: buen funcionamiento del gobierno, buenas relaciones con los vecinos, entorno empresarial sólido, bajos niveles de corrupción y altos niveles de capital humano. La corrupción y la ineficacia del gobierno son impulsores clave de la violencia, ya que contribuyen a la impunidad y reducen los recursos para hacer frente a los delitos.

El pilar sobre buen funcionamiento del gobierno fue el que presentó un mayor deterioro, con un cambio de 20% en la última década. También se observa un deterioro en el indicador de Estado de derecho y un incremento en la denuncia de violaciones a los derechos humanos que se relaciona con la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Los altos niveles de capital humano se refieren a la medida en que las sociedades educan a los ciudadanos y promueven el desarrollo del conocimiento, lo que mejora la productividad económica, la atención a la juventud, la participación política y el capital social.

Los altos niveles de Paz Positiva ocurren cuando las actitudes hacen que la violencia sea

menos tolerada, cuando las instituciones son resilientes y más receptivas a las necesidades de la sociedad, y cuando las estructuras crean el ambiente para la resolución no violenta de los conflictos. En resumen, México ocupó el puesto 85 de los 163 países evaluados por el Índice de Paz Positiva. Esto representa 16 lugares por debajo de la posición que tenía en 2013.

Para concluir, quisiera decir que me parece muy acertado calcular los costos directos e indirectos de la violencia; sin embargo, hay costos que no aparecen en esas estimaciones o que quizá no pueden calcularse. Por ejemplo, cuando se habla del salario que deja de percibir una persona por ir a prisión, no se toma en cuenta el costo que también tiene para sus hijos e hijas dejar de tener un padre o una madre que los cuide, los acompañe y los proteja. En general, me parece que la infancia no está suficientemente visibilizada en el índice, cuando debería tener un lugar central. En mi opinión, la violencia tiene un costo significativamente más elevado para los niños y las niñas que para los adultos. Los niños que pierden a su padre, su madre o algún hermano porque fueron asesinados o desaparecidos sufren carencias inestimables que dejan huellas imborrables en su formación y en sus posibilidades de tener un desarrollo sano y pleno. Esto debería visibilizarse en el índice. Nuestro país requiere apostar por la infancia y requiere políticas específicas para reparar los graves daños que la violencia les ha infligido durante tantos años en que no hemos sido capaces de brindarles seguridad y justicia. **D**

## Sobre la autora

**ELENA AZAOLA** es profesora-investigadora y profesora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como investigadora emérita desde 2018. Durante 40 años ha realizado estudios acerca de las instituciones penitenciarias y de policía, así como sobre delitos violentos y la participación de jóvenes en grupos delictivos. Varios de estos estudios fueron pioneros en México y Latinoamérica, y han obtenido diversos premios y reconocimientos. Ha publicado 309 trabajos tanto en México como en 17 países.